

# Bolivia: la formación de los actores de la insurrección de octubre de 2003

Fabiola Escárzaga

*Nosotros los indígenas tenemos nuestro propio territorio. Este territorio no es de los occidentales, de los colonizadores, es nuestro. Tenemos nuestra propia historia, nuestra propia filosofía, nuestras leyes, religión, idioma, hábitos y costumbres. Desde esa perspectiva, nosotros los aymaras nos consideramos una nación y de ahí la idea de autodeterminarnos. Nosotros no seguimos la bandera tricolor boliviana que cargan nuestros opresores; nosotros tenemos la wiphala [la bandera de siete colores, a cuadros].*

Felipe Quispe, dirigente aymara<sup>1</sup>

## Resumen

En el presente artículo se analiza el proceso de gestación de los más significativos sectores etno-campesinos que participaron en la insurrección de octubre de 2003. Aborda sus condiciones de producción y vida, sus identidades, sus estrategias de lucha, sus proyectos políticos y su ideología, elementos que se configuran en la historia larga y corta de Bolivia, y que son afectados drásticamente a partir de las reformas neoliberales que comenzaron a aplicarse en 1985, con el cierre de la minería del estaño. Este hecho significó la desarticulación del proletariado minero, cuya fuerza organizada amenazaba al sistema de dominación. Dicho sector fue reemplazado después, como eje de la lucha popular, por distintos actores etno-campesinos. También se analiza la estrategia de cooptación y neutralización que los gobiernos neoliberales aplicaron sobre los actores étnicos.

## Abstract

In the present article we analyze the gestation of the most important indigenous groups participating in the uprising of October 2003. It looks into their productive life, conditions, identities, strategies, political projects and their ideology. The article goes back to the history of Bolivia and analyzes how the arrival of neoliberal policies, which began in 1985 with the tin mines closure, affected the indigenous populations. Closing the tin mines affected the proletariat base composed mainly by miners, who had threatened the dominating groups so much. Their demise meant the arrival of indigenous groups in the political scene. Finally, this article analyzes the coercive and repressive forms that the neoliberal governments used to put down the indigenous movement.

## El ¡ya basta! boliviano

La caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003 fue producto de una intensa movilización popular durante los meses de septiembre y octubre en torno a la consigna de NO a la venta de gas natural boliviano, a

<sup>1</sup> Entrevista a Felipe Quispe, "Autonomía indígena y la coca", por Luis Gómez (2002).

precio de regalo, a través de un gaseoducto que cruzaría por territorio chileno hacia el Pacífico, con destino a Estados Unidos.<sup>2</sup> Esta urgencia, en el fondo circunstancial, luego de una desmedida represión militar y policial cuyo saldo fue de 82 muertos y 500 heridos, fue opacada por un clamor favorable a la renuncia del presidente *asesino del pueblo*. Ésta ha sido, de hecho, la masacre más virulenta en las últimas décadas; la anterior fue durante la dictadura del general Hugo Bánzer, en 1974.

Octubre marcó en Bolivia la cima de un ciclo de movilizaciones populares que comenzó en el año 2000, movilizaciones de rechazo al modelo neoliberal cuya aplicación inició en 1985, luego de la vuelta a la democracia en 1982 y que cuestionan también el sistema de partidos que la hizo posible y la corrupción que caracteriza a éste, y que pone en evidencia el agotamiento del discurso de reconocimiento étnico *pluri-multi*<sup>3</sup> que envolvió a los dos procesos y permitió legitimarlos frente a las empobrecidas mayorías etno-campesinas.<sup>4</sup>

El tema del gas fue sólo la gota que derramó el vaso de la paciencia popular. La acumulación de agresiones de los gobiernos neoliberales a la economía popular, la vulneración reiterada de la soberanía nacional y la evidencia del fracaso de 20 años de neoliberalismo, se conjugaron dando lugar a la crisis que estalló en octubre. La estrategia discursiva elegida por Sánchez de Lozada, que presentó la

<sup>2</sup> Bolivia perdió en la Guerra del Pacífico de 1879 a 1883 contra Chile (apoyado por intereses británicos) el territorio salitrero de Antofagasta, asimismo, se vio despojada de una inmensa fuente de acumulación de riqueza —que sirvió a Chile para su despegue económico— y de su salida al mar. Otras grandes pérdidas territoriales bolivianas han sido la cesión a Brasil del Acre Amazónico, luego de la invasión de éste en 1904 y en la Guerra del Chaco de 1932 a 1935 contra Paraguay, la pérdida del territorio chaqueño. La pérdida más sentida ha sido la primera, pues ha obstaculizado las exportaciones. El nacionalismo criollo boliviano ha tomado como motivos fundamentales de su discurso (a falta de valores más sólidos) la recuperación de la *calidad marítima* de Bolivia y el odio a su vecino Chile.

<sup>3</sup> El discurso etnicista neoliberal *pluri-multi* fue formulado durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) con la finalidad de desactivar el descontento de la población campesina quechua y aymara, mayoritaria en el occidente del país. Se decretaron reformas constitucionales reconociendo el carácter pluriétnico y multicultural de Bolivia, así como los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, que en la terminología boliviana corresponden únicamente a los pueblos del oriente amazónico de tradición cazadora y recolectora y que representan un 2 por ciento de la población, mientras que las demandas de los mayoritarios quechuas y aymaras fueron ignoradas. El vicepresidente de este gobierno fue el dirigente aymara Víctor Hugo Cárdenas, uno de los dirigentes más importantes del movimiento katarista iniciado a fines de los años sesentas; de esta forma, varios dirigentes e intelectuales indios o mestizos cercanos al katarismo fueron cooptados por el gobierno. El tema se desarrollará más adelante.

<sup>4</sup> Bolivia tiene uno de los porcentajes más altos de población indígena en América Latina. Los registros censales que atienden únicamente la variable lengua hablada consideran el 50.51 por ciento, mientras que estimaciones que toman otras variables le otorgan el 71 por ciento de población indígena. Considerando la estimación baja del 50.51 por ciento, el 48.2 por ciento corresponde a la población andina (campesinos quechuas y aymaras del occidente del país) y el 2.3 por ciento a 28 grupos de cazadores recolectores del oriente amazónico. Ver Matos Mar (1993:162) y Daniel Wermus (2002:14). La denominación más generalizada para la población indígena del occidente es *originarios* y la de los grupos amazónicos es la de *indígenas*. Los originarios quechuas y aymaras consideran peyorativo y una imposición de los conquistadores y dominadores los términos indio o indígena, los cuales rechazan.

venta de gas natural como el gran negocio que sacaría a Bolivia, ahora sí, de la miseria, topó con la memoria y el sentido común de la población que ha vivido las experiencias frustradas previas con la plata, el caucho, el estaño y el petróleo, cuya extracción y venta en los mercados internacionales no sólo no aportaron riqueza a la población, ni industrialización al país, sino afirmaron el sometimiento de los gobiernos bolivianos a las empresas transnacionales y a los intereses estadounidenses.

La Guerra del Agua de abril de 2000 en Cochabamba contra la privatización del recurso vital (Gutiérrez Aguilar, 2001), la Guerra contra un nuevo impuesto del 12.5 por ciento a los salarios, de febrero de 2003, y la Guerra del Gas de septiembre-octubre del mismo año, fueron movilizaciones ciudadanas de carácter intersectorial, que han sido capaces de integrar lo indígena, lo obrero y lo marginal de la ciudad en una misma lucha, en contra de medidas neoliberales que atentaban contra la subsistencia de la población. Alternadas con éstas, ha habido otras movilizaciones que ya son periódicas: las movilizaciones de los campesinos cocaleros en el Chapare (Cochabamba), bajo la dirección de Evo Morales, en contra de la erradicación de cultivos de hoja de coca, y las movilizaciones de los campesinos aymaras del Altiplano, bajo la dirección de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y su secretario general Felipe Quispe, en torno a un extenso pliego de demandas (CSUTCB, 2001).

Otra expresión del ascenso de masas fue la participación de ambos dirigentes campesinos en las elecciones presidenciales de 2002, en las que cada uno participó como candidato de su propio partido. Evo Morales, por el Movimiento al Socialismo (MAS), partido integrado por políticos y dirigentes de la vieja izquierda y un amplio espectro social cuyo eje es el movimiento cocalero. Bajo las siglas de Izquierda Unida (IU) había ya participado en las elecciones municipales de 1995 y en las nacionales de 1997, en las que logró cuatro diputaciones, entre otras la de Evo Morales. La participación electoral de Felipe Quispe por el Movimiento Indio Pachakutik (MIP), partido de ideología indianista radical y expresión política de la CSUTCB, resultó una sorpresa pues el dirigente campesino y ex guerrillero había sido reacio a ensayar la vía electoral (Quispe, 2001). El MAS obtuvo el segundo lugar en la votación con 20.94 por ciento y el MIP el 6.09 por ciento; sumados los votos de ambos habrían superado a los del candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). La llegada masiva de los candidatos populares al parlamento representó un duro golpe al sistema señorial de representación. En todo caso la vía electoral ya forma parte del acervo del movimiento indio, y ellos han experimentado directamente los límites de la vía parlamentaria para combatir el modelo neoliberal en curso.

El ciclo de movilizaciones iniciado en el año 2000 y su capacidad para derrocar a un presidente expresa una importante acumulación de experiencias organizativas de las masas etno-campesinas y populares, y la progresiva articulación de una propuesta alternativa desde los actores étnicos bolivianos que supera el tradicional sectarismo propiciado por el caudillismo de antaño, y el sentimiento de derrota y resignación frente al modelo neoliberal. El ascenso popular es paralelo

al fracaso del modelo neoliberal y a la ineficacia de la corrupta elite política blanca para conducir al país.<sup>5</sup>

La Guerra del Gas alcanzó a siete de las nueve provincias del país, aunque el escenario fundamental de la insurrección fue la ciudad de El Alto –ciudad-dormitorio que alberga a quienes trabajan en La Paz, y que concentra todas las contradicciones generadas por el neoliberalismo: pobreza extrema, desempleo y falta de servicios–, la ciudad más indígena del país y la de mayor crecimiento poblacional en las últimas décadas.<sup>6</sup>

¿Qué es lo que ha permitido a los sectores etno-campesinos de Bolivia el ascenso político de la última década? La organización a partir de la revalorización de las identidades étnicas y de la autoconstrucción de las identidades, en un contexto sumamente adverso no sólo por la implantación del neoliberalismo, sino por la percepción, por parte de la intelectualidad al servicio del poder, de la posibilidad de instrumentar el elemento cultural, particularmente el tema de las identidades étnicas, como un factor coadyuvante en la reestructuración neoliberal del país, mediante la cooptación de los actores étnicos y la neutralización de las alternativas de autorrepresentación y autorreivindicación. De acuerdo a lo anterior, analizaremos el proceso de afirmación cultural y autoorganización que asumen variados actores étnicos y populares bolivianos como respuesta activa frente a la estrategia de cooptación, proceso que incluye la lucha contra la opresión neoliberal y la resistencia contra la pretensión de manipular las identidades étnicas bolivianas.

### **La reconversión neoliberal del Movimiento Nacionalista Revolucionario**

Un principio de las ciencias sociales para alcanzar la objetividad es evitar el maniqueísmo. No obstante, a veces, como en el caso boliviano, cuando la polarización social y étnica no se mitiga con el devenir histórico y las oligarquías se fortalecen con la democracia, los datos de la realidad parecen el guión de un panfleto de los años setentas o un mal chiste.

A pesar de su vasto territorio y de la riqueza mineral que proporcionó al mercado mundial durante cinco siglos, Bolivia es uno de los países más pobres de la región.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Sánchez de Lozada es el sexto presidente sudamericano obligado a abandonar el poder por el repudio popular en los últimos seis años. Los otros cinco presidentes son: el ecuatoriano Abdalá Bucaram (1997), el paraguayo Raúl Cubas (1999), el también ecuatoriano Jamil Mahuad (2000), el peruano Alberto Fujimori (2000) y el argentino Fernando de la Rúa (2001).

<sup>6</sup> La Paz tiene 792 mil habitantes y El Alto 694 mil. La tasa de crecimiento anual de La Paz, entre 1976 y 1992, fue de 1.78 por ciento, y entre 1992 y 2001, de 1.14 por ciento, en tanto que la de El Alto fue de 8.86 y de 5.3 en los mismos intervalos (Censo 2001). En El Alto hay 60 por ciento de aymara hablantes y 8 por ciento de quechua hablantes (Albó, 1995, citado por el Viceministerio para Asuntos Indígenas y Populares –VAIPO–, 2000).

<sup>7</sup> El territorio boliviano tiene un millón 98 mil 581 kms<sup>2</sup>. En 2003 Bolivia ocupó el lugar 114 en el índice de desarrollo humano del PNUD; sólo Honduras, Guatemala, Nicaragua y Haití están por debajo entre los países más pobres de América Latina. Su población es de 8.5 millones de habitantes, el PIB per capita es de 970 dólares, la esperanza de vida de 63.3 años, el índice de pobreza de 62.7 por ciento y de 81.79 por ciento en el campo, el índice de analfabetismo es de 14.0 por ciento (PNUD/IDH, 2003).

Los obstáculos estructurales que enfrentó en el siglo XX para su desarrollo capitalista y la crisis política, económica y social que vivió a principios de los años ochentas, al retornar a la democracia, lo dejaron en condiciones de extrema vulnerabilidad. La situación era difícil de resolver debido al ascenso popular. En 1985, el país fue rescatado por las instituciones financieras y de cooperación internacional al apoyar su recuperación económica, no tanto por su peso como economía nacional, sino por su ubicación estratégica en el corazón de Sudamérica.

A cambio de la ayuda, el país debió aplicar un drástico ajuste neoliberal y adecuar su nueva institucionalidad a la agenda internacional que incluía temas como: democracia, desarrollo sustentable, identidad y género. Con un alto grado de renuncia a la soberanía, los gobiernos de ese periodo aceptaron la condición de objeto de experimentación, a un costo relativamente bajo para las instituciones financieras internacionales, pero muy alto para los sectores populares.<sup>8</sup>

El encargado del diseño, la ejecución y la legitimación del ajuste estructural fue el mismo partido que en 1952 condujo la revolución antioligárquica y antiimperialista, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). El 29 de agosto de 1985, en su tercer periodo de gobierno, el anciano presidente Víctor Paz Estensoro, el mismo que nacionalizara las minas en 1952, anuncia el Decreto Supremo 21060 que privatiza la minería del estaño y "relocaliza"<sup>9</sup> a 23 mil mineros de la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL), empresa estatal creada a partir de la nacionalización de las minas en 1952. Agotado el ciclo de la minería del estaño, la elite gobernante consolidada a partir del mismo sustituye el modelo estatista que la había nutrido por el neoliberalismo, y lanza a la calle al poderoso proletariado minero que la había cercado políticamente o que había cogobernado con ella durante treinta años. Gonzalo Sánchez de Lozada, ministro de Planificación y Coordinación desde enero de 1986, fue el encargado de privatizar la minería y ejecutar el programa de ajuste estructural y estabilización monetaria y financiera, más conocido como la Nueva Política Económica (NPE), es decir, el programa neoliberal.<sup>10</sup>

Sánchez de Lozada es un gran empresario minero perteneciente a una de las familias bolivianas más ricas. Su padre fue fundador del MNR en 1942 y fungió como jefe de la delegación boliviana en Washington. "Goni", como es llamado popularmente,<sup>11</sup> es un multimillonario formado en Estados Unidos durante su in-

<sup>8</sup> En 2001 Bolivia recibió 728.5 millones de dólares en ayuda externa, el 9.1 por ciento del PIB, más que el 8.3 por ciento que recibió por concepto de inversión externa. El 63 por ciento de los bolivianos son pobres y el 37 por ciento son pobres extremos (*Ibid*).

<sup>9</sup> El neoliberalismo boliviano ha generado un amplio diccionario de eufemismos, por ejemplo, los despidos son llamados *relocalizaciones* y la privatización fue bautizada como *capitalización*.

<sup>10</sup> Entre 1985 y 1987 los despedidos fueron: 23 mil mineros de 28 mil de la minería estatal, 6 mil de minas privadas, 10 mil de la administración pública y 2 mil de bancos. Se cerraron, además, más de 110 fábricas (Kruse, 2000:159).

<sup>11</sup> Todos los políticos tienen un sobrenombre usado por la prensa y por la población.

fancia y juventud que volvió a Bolivia en 1951 para dedicarse a los negocios. En 1962 creó la Compañía Minera del Sur (COMSUR).<sup>12</sup> En 1979 se inició en la política, dejando la presidencia de COMSUR para postularse como diputado por Cochabamba. En dicha ocasión ganó el escaño, pero sólo pudo asumirlo en 1982 debido a un paréntesis golpista.<sup>13</sup> En 1989, con el apoyo de Paz Estensoro, "Goni" se postuló como candidato a la presidencia; en su campaña bajó su perfil neoliberal prometiendo lo que había cancelado su gestión neoliberal: más empleo, asistencia social, viviendas y mejores salarios. Fue el candidato con más votación, 23 por ciento de los sufragios, 6 mil más que Bánzer, el segundo lugar. Como ninguno de los candidatos alcanzó el 50 por ciento, de acuerdo al sistema electoral boliviano, el nuevo Congreso decidió la elección, el MNR disponía de 49 representantes entre un total de 157 y Bánzer decidió aliarse al tercero en discordia, Jaime Paz Zamora, candidato y líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), arrebatándole prácticamente de las manos la presidencia a "Goni". Como consuelo, en abril de 1990, asumió la jefatura nacional del MNR.<sup>14</sup>

En 1993, Sánchez de Lozada se lanza nuevamente en busca de la presidencia y la alcanza, debido a condiciones más favorables. En la campaña bajó nuevamente su perfil tecnócrata y a diferencia de cuatro años antes encuentra una oferta más atractiva y etérea: ya no empleo y buenos salarios, sino la superación de la marginación ancestral, política, económica y social de las comunidades amerindias del país, "una revolución para devolver Bolivia a su gente". En ese rumbo se alió al Movimiento Revolucionario Tupak Katari-Liberación (MRTKL), cuyo líder, el respetado intelectual aymara Víctor Hugo Cárdenas Conde, fue candidato a la vicepresidencia. Esta vez, "Goni" obtuvo el 33.8 por ciento de los sufragios y en el congreso amarró los votos de la Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y del Movimiento Bolivia Libre (MBL), además del MRTKL, logrando 97 votos y con ello la presidencia. Acentuaban el contraste de fenotipos del binomio presidencial sus diferentes verbos: el *español* del gringo "Goni" y el perfecto castellano del aymara Cárdenas, quien fue reivindicado por el gobierno como el primer vicepresidente indio de Sudamérica.

El programa neoliberal avanza a paso firme en el primer gobierno de Sánchez de Lozada, de 1993 a 1997. Las privatizaciones se llevaron a fondo, se abrieron las empresas estratégicas de propiedad estatal al capital foráneo —europeo, estadounidense y sudamericano—, que pudo adquirir el 50 por ciento de las acciones

<sup>12</sup> El consorcio de Sánchez de Lozada es sólo un poco menos grande que la COMIBOL en su momento de auge, tiene plantas en todo Sudamérica, desde Argentina hasta Panamá, y en diversos países de Asia.

<sup>13</sup> Su hermano Antonio Enrique, también empresario, se inició en la política y el servicio público mucho antes: entre 1962 y 1971 fue vicepresidente de la COMIBOL, embajador de Bolivia en Estados Unidos y ministro de Hacienda. En 1986 fue nombrado contralor general de la República, prestigiosa oficina que ocupó hasta 1992.

<sup>14</sup> Esta regla ha aplicado hasta el 2002. Si ningún candidato alcanza el 50 por ciento de la votación, el nuevo Congreso es el que elige, en votación nominal, al presidente. Hasta 1997 lo hacía entre los tres candidatos más votados, a partir de 2002 se estableció una nueva regla: la elección sería entre los dos más votados para evitar arreglos poco transparentes que dieran el triunfo al tercer lugar. El ligero cambio no democratiza un sistema electoral tan elitista.

de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y de Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). En 1994 la COMIBOL invita a inversionistas nacionales y extranjeros a pujar por los derechos de prospección y explotación de mineral en un millón de hectáreas, a lo largo y ancho del país. En adelante, el otrora monopolio estatal minero funcionó como administrador de licitaciones más que como producto, despidió a casi todos sus 6 mil trabajadores y quedó virtualmente desmantelado. La nueva ola de despedidos alimentó, como la anterior, el ejército de campesinos coccaleros del Chapare.

### **La propuesta *pluri-multi***

La estrategia de reconocimiento de la diversidad étnica y de la multiculturalidad aplicada por el gobierno es convergente, en sus objetivos y medios, con los lineamientos de sus patrocinadores internacionales y, al mismo tiempo, es un elemento de consumo interno para la legitimación de los drásticos cambios impuestos por el neoliberalismo que golpearon la economía popular y le arrebataron a la población los derechos adquiridos. Cumple con ello el propósito de neutralizar la amenaza permanente que representan los sectores populares mayoritarios marcados por rasgos étnicos.

Las reformas a la Constitución de 1947, aprobadas en 1994, representan la afirmación y profundización de la reestructuración neoliberal instrumentada previamente.<sup>15</sup> Sus promotores impulsan la imagen de Bolivia como un país con una de las más avanzadas legislaciones de América Latina, en términos del reconocimiento de la diversidad étnica y del pluralismo cultural de su población, y como ejemplo a seguir en la aplicación del modelo neoliberal y, aún más, como demostración de la feliz armonía entre una y otro.

Para formular la propuesta *pluri-multi*<sup>16</sup> los asesores gubernamentales se apropiaron de una parte del proyecto katarista –que postula la centralidad política de los campesinos aymaras y quechuas y la necesidad de su acción autónoma–, cooptaron a algunos de sus dirigentes y crearon un nuevo indigenismo disfrazado

<sup>15</sup> Se reformaron varios artículos constitucionales admitiendo el carácter pluriétnico y multicultural de Bolivia, reconociendo los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO's), garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones; la personalidad jurídica de las comunidades indígenas campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos. Complementan estas reformas la Ley de Participación Popular, la Ley de Reforma Educativa y la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, conocida como Ley INRA.

<sup>16</sup> Como denominan, en alguna medida, peyorativamente los involucrados en la formulación de la propuesta y que no obstante su diversificada ubicación política en la actualidad, coinciden en negar su autoría. Desde dirigentes indígenas cooptados por el MNR como Víctor Hugo Cárdenas hasta intelectuales criollos o mestizos identificados con posiciones indianistas como Xavier Albó y Silvia Rivera, algunas de cuyas ideas indianistas han sido incorporadas en el discurso estatal de reivindicación étnica, todos niegan ser parte de él (Rivera, 2001).

de indianismo, que sustituye al indianismo katarista por un programa formulado por asesores blancos o mestizos que enarbolan los intereses de los indios del oriente boliviano y que los utilizan como clientela y justificación para fortalecer su propio proyecto.

En su ofensiva antipopular, el proyecto *pluri-multi* aprovecha y estimula el faccionalismo que impregna la cosmovisión andina y que se expresa en el campo popular boliviano de hoy, como la confrontación entre la identidad étnica y la campesina de un mismo sujeto dual, indio y campesino, producto de la superposición o síntesis inconclusa de las consecuencias de su historia larga (prehispánica y colonial) y su historia corta<sup>17</sup> (producto de la Reforma Agraria de 1953), que favorece las rivalidades y la división al interior para obstruir las posibles alianzas entre los distintos sectores que conforman el campo popular.

Las políticas neoliberales transformaron radicalmente las condiciones económicas y sociales prevalecientes hasta entonces, cancelando las posibilidades de reproducción de su gran enemigo, la clase obrera minera, que con una larga acumulación histórica era la mayor amenaza a la hegemonía de la elite blanca. Desactivada la amenaza minera, aparecieron los productores de hoja de coca del Chapare cochabambino y los aymara del altiplano paceño, a los que se enfrentó o minimizó, tomando como estandarte a los indios *dóciles* de las tierras bajas. El paquete de reformas neoliberales coloreadas de reconocimiento a la diversidad cultural busca expropiar la capacidad de autorrepresentación de los sectores dominados, neutralizando los atributos que permitan afirmar su identidad tanto clasista como étnica.

La propuesta *pluri-multi* se presenta como el cumplimiento de las demandas y los intereses de los subalternos, pero su aplicación es muy limitada debido a la falta de voluntad política y de capacidad de las autoridades centrales para imponer las nuevas leyes sobre los intereses dominantes locales, regionales y nacionales que se ven afectados por ellas. Se trata de una estrategia sofisticada de negación del otro; a diferencia de los mecanismos racistas de dominación empleados en el pasado —que le imponían al indio una máscara de obrero o de campesino parcelario—, cerrando los ojos a su ser indio, ahora se procura un conocimiento profundo y preciso del adversario. Ya no basta con el reconocimiento de las diferencias culturales que ostentan, es necesario conocer las características de esa *otredad* para lograr una acción más eficaz en su contra y cumplir el mismo propósito: negarlo, anularlo, vencerlo y eliminarlo por la vía de su conversión en otra cosa.

### **La redistribución espacial neoliberal**

El espacio andino<sup>18</sup> ofrece hoy condiciones muy desfavorables para la agricultura parcelaria capitalista que limita la productividad del trabajo. Tres macro-regiones

<sup>17</sup> De acuerdo a la formulación de Silvia Rivera (1983 y 1986).

<sup>18</sup> Que corresponde a los actuales países de Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y norte de Argentina y que integraban el imperio inca a la llegada de los españoles.

componen la región andina: sierra, selva y costa,<sup>19</sup> conformadas cada una por una diversidad de pisos ecológicos,<sup>20</sup> los cuales generan muy variadas condiciones climáticas en espacios reducidos que obligan a un extremo fraccionamiento de los terrenos de cultivo. A lo anterior se agregan otras dificultades: lo accidentado del terreno, que limita el uso de herramientas y de tracción animal; los suelos son pobres y propensos a la erosión, hay escasez de agua, hay heladas nocturnas y marcadas diferencias de temperatura entre día y noche, entre sol y sombra.

El hombre andino compensó las desventajas mediante diversas estrategias productivas basadas en el *control vertical de múltiples cultivos*, consistente en el cultivo simultáneo de distintos productos en cada piso ecológico, con demandas estacionales de mano de obra que se intercalan y permiten el uso de la fuerza de trabajo durante un máximo de días en el año agrícola y el aprovechamiento de la mano de obra familiar en actividades específicas, de acuerdo a la edad y al género. De manera que la estrategia multicultivos convierte la desventaja del suelo andino en ventaja (Golte, 1986).

Para atender diversos ciclos agrarios en terrenos distantes entre sí, en sierra, costa y selva, se idearon mecanismos complejos de organización que el Estado inca coordinó y sistematizó, formas variadas de cooperación en el trabajo y de posesión colectiva de la tierra. El *ayllu* o comunidad integrada por la familia ampliada era la unidad productiva básica, manejaba directamente algunos ciclos productivos de acuerdo a la disponibilidad de recursos de la región. Tenía un amplio margen de autonomía y elasticidad en sus decisiones, y el trabajo comunal era dirigido por autoridades locales, es decir, los *mallkus* (caciques). El *ayni* era el sistema de cooperación de varios *ayllus* en un ciclo agrícola, se basaba en la asignación de similares extensiones de tierras laborables. La *minka* era el grupo de campesinos convocado por un organizador para desarrollar una obra de manera colectiva. La unidad local funcionaba a partir del principio de reciprocidad entre sus miembros (Wachtel, 1976).

La estrategia de multicultivos, las formas de cooperación en el trabajo y los sistemas de autoridad tradicional son rasgos distintivos que persisten hasta hoy entre la población de habla aymara y quechua.

La Revolución de 1952 y la Reforma Agraria de 1953 propiciaron una lenta reestructuración del territorio boliviano que sería consolidada a partir del ajuste neoliberal de los años ochentas y las reformas que la complementan. La vieja regionalización se caracterizaba por tres ámbitos ecológicos que determinaban diversas configuraciones productivas y demográficas: el altiplano, los valles y la amazonia.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Como comentamos antes, Chile se apropió de la costa boliviana a consecuencia de la derrota de Bolivia en la Guerra del Pacífico (1879-1882).

<sup>20</sup> El Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) considera para Bolivia 7 ecorregiones: 1. Altoandina, 2. Puna, 3. Yungas, 4. Serranías y valles interandinos, 5. Faja subandina, 6. Llanura beniana y panandina y 7. Llanura sudoriental (VAIPO, 2000).

<sup>21</sup> El altiplano representaba el 20 por ciento del territorio, los valles interandinos el 25 por ciento y la selva el 40 por ciento.

El altiplano andino se ubica por encima de los 3 mil 600 metros sobre el nivel del mar (msnm), corresponden a él los departamentos de Oruro, La Paz y Potosí. Fue el asiento de los yacimientos minerales más ricos del país y el eje de su articulación al mercado mundial hasta los años ochentas; las condiciones desfavorables para la agricultura permitieron la persistencia de los *ayllus* como unidad productiva entre la población aymara.

Los valles interandinos del departamento de Cochabamba tienen una altitud promedio de 2 mil 500 msnm y son el espacio boliviano más propicio para la agricultura, lo que favoreció la formación de latifundios y estimuló, desde la Colonia, un proceso de mestizaje mayor entre la población blanca y el campesinado quechua del lugar, a diferencia de lo ocurrido en el altiplano aymara. Cochabamba fue el único departamento directamente afectado por la Reforma Agraria de 1953, dando lugar al fraccionamiento de los grandes latifundios. Las pequeñas parcelas, resultado de dicho fraccionamiento, fueron vendidas en propiedad privada a los campesinos a los que se les impuso la forma sindical de organización, para eliminar las formas de organización comunitaria, crear un individualismo que favoreciera la productividad y borrara su identidad indígena. Sus excedentes de producción se destinaron a los mercados urbanos y los excedentes de mano de obra migraron a trabajar en las minas cuando la tierra no alcanzó más.

La imposición de la forma de organización sindical sobre todos los campesinos del país, aymaras y quechuas, no logró el propósito modernizador de convertir a los comuneros en pequeños propietarios, ni siquiera en los valles de Cochabamba donde hubo reparto agrario; allí la extrema parcelación de la tierra evitó la consolidación de pequeños propietarios independientes. La reducción al mínimo del tamaño de las parcelas es uno de los mayores problemas en la actualidad, con ironía los campesinos hablan ya no del minifundio sino del *surcofundio*.

Mediante la sindicalización forzada, el MNR se dotó de una enorme clientela entre las comunidades originarias que tenían formas de autoridad autóctonas derivadas del *ayllu*, y funcionaban dentro y fuera del latifundio, tanto en los valles como en el altiplano. El sindicato se desarrolló en cada núcleo de población rural al fusionarse con las comunidades, o más bien las comunidades se mimetizaron en sindicatos. En dos años el MNR afilió en la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB) a más de medio millón de individuos en cerca de 20 mil sindicatos agrarios (Rivera, 1983). Durante veinte años este mecanismo permitió al MNR o a los gobiernos militares que lo sucedieron en 1964, disponer de una fuerza de masas para enfrentar, cuando era necesario, al proletariado minero, a esto se le llamó el Pacto Militar Campesino.

Al oriente de Los Andes se localiza la región amazónica, con alturas por debajo de los 800 msnm en torno a la cuenca del Río Amazonas. Esta región resultó de difícil acceso para los conquistadores y de poco provecho económico, por ello fue desarticulada del complejo andino y así permaneció durante casi cinco siglos. Sólo se instalaron allí las órdenes religiosas, los jesuitas y los dominicos que colonizaron espiritualmente a los naturales nómadas de la región, adaptando las formas comunitarias de sus habitantes a las necesidades productivas y políticas de la Iglesia

católica. Su labor fue menos violenta que la de los conquistadores pero más eficaz para disciplinar a los dominados y para legitimar la dominación.

La colonización de la selva, o *marcha al Oriente*, se inició después de la Reforma Agraria de 1953, cuando las tierras de los valles resultaron insuficientes frente al crecimiento de la población campesina. La colonización apoyada por el gobierno militar de Bánzer (1971-1977) no buscaba resolver el problema de los campesinos sin tierras, sino abrir espacios para la expansión de los voraces grupos dominantes; para ello se solaparon los grandes latifundios y se establecieron cooperativas fomentadas por la Reforma Agraria, que son en realidad formas encubiertas de agroindustrias conformadas por socios de clase media que acceden por esta vía a los créditos gubernamentales. El mayor estímulo para la incorporación de la selva amazónica al mercado de tierras y a la producción capitalista fue el cultivo de la hoja de coca, materia prima para la elaboración de cocaína, que tiene su mejor hábitat en la Faja subandina, entre los 2 mil 500 y 800 msnm. El desarrollo de esta actividad incrementó exponencialmente los intercambios entre la selva y las otras regiones del país.

Clausurado el ciclo minero en 1985, el Oriente se convirtió en el polo dinámico del país vinculado al vecino Brasil; la selva ha sido colonizada por grandes terratenientes que explotan irracionalmente maderas preciosas, caucho, soya, algunos minerales y ganado vacuno. La ciudad de Santa Cruz es ya, por el número de habitantes, la segunda del país.<sup>22</sup> El viejo eje minero La Paz, Oruro y Potosí ha sido reemplazado por el eje troncal La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y, es en éste donde los campesinos desarrollan sus protestas, con bloqueos de caminos que buscan paralizar la actividad económica y de esta manera presionar a las autoridades, pues a medida que su participación en la economía nacional es crecientemente marginal, no tienen otros mecanismos para hacer sentir su fuerza.

Las reformas neoliberales han transformado radicalmente el escenario productivo y demográfico del país, una migración sin precedentes ha alterado modos de vida y de pensar en los distintos espacios. Los cambios ocurridos propician nuevos usos del territorio y nuevas articulaciones espaciales. Para dar cuenta de tales cambios, el diagnóstico elaborado por el Viceministerio para Asuntos Indígenas y Populares (VAIPO) para el Banco Mundial, en el año 2000, ofrece una nueva regionalización del país que dice mucho acerca de lo que se quiere ver de la diversidad étnica de éste y lo que se quiere ocultar de ella.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> La población de Santa Cruz de la Sierra para 2001 ascendió a un millón 114 mil 95 habitantes, mayor que la de La Paz, sede de gobierno, y que la de El Alto, su ciudad satélite. Su crecimiento anual entre 1976 y 1992 fue de 6.42 por ciento y entre 1992 y 2001 de 5.06 por ciento. Entre 1992 y 2001 el departamento de La Paz disminuyó su peso demográfico en el total nacional, pasando del 29.6 por ciento al 28.4 por ciento, en tanto que el departamento de Santa Cruz lo incrementó, pasando del 21.2 por ciento al 24.5 por ciento. En el mismo intervalo la tasa de crecimiento del departamento de La Paz fue de 2.29 por ciento y el de Santa Cruz de 4.29 por ciento. La proporción entre población urbana y rural en el departamento de La Paz es de 2 a 1, mientras que en el de Santa Cruz es de 3 a 1.

<sup>23</sup> El VAIPO depende del Ministerio de Asuntos Campesinos. Curiosamente, en la página de Internet del documento se simplifica su título como Diagnóstico Nacional del Banco Mundial. El extenso documento, más que aportar nuevas perspectivas o información original, es una síntesis

El VAIPO agrupa en una sola región lo que antes se distinguía como altiplano y valles, denominándola *región Andina o tierras altas*. En cambio, lo que antes era una sola región, la Amazonía, la divide en dos: la Amazónica y la Chaqueña Oriental, y las llama genéricamente *tierras bajas*. Se establece que no todas las tierras bajas son exclusivamente tierra boscosa, como se pensaba, sino que hay regiones de ellas que tienen vocación agrícola y ganadera, las que los neolatifundistas están explotando irracionalmente.

El diagnóstico señala también los cambios en la población de Oriente, donde no todos los pueblos indígenas continúan siendo exclusivamente cazadores, recolectores o pescadores, sino que muchos se han transformado en población sedentaria y campesina. Por otra parte, la población campesina comunitaria de la región andina (basada en el *ayllu* recompuesto) no se limita ya al altiplano y a los valles sino que se extiende a otras zonas, como el subtrópico y zonas de colonización del occidente andino.

### **Coca y cocaleros**

La hoja de coca ha sido consumida por la población andina desde hace siete siglos. Su insalivación o *acullico* (en aymara) tiene efectos narcóticos y estimulantes que permiten al hombre la realización de grandes esfuerzos físicos con poco alimento, pero es también vehículo de comunicación con los dioses y de integración de la comunidad. Tomado en infusión reporta muchos beneficios como la cura del mal de altura. La vida ritual y social de la población andina está mediada por la presencia de la coca; ella es parte de la identidad de los habitantes *originarios*, quechua y aymara, pero su uso es generalizado entre toda la población boliviana. Una sesión sindical, una sesión de un cabildo indio, un viaje al altiplano y, últimamente, una sesión en una discoteca, inician con la insalivación colectiva de hojas de coca.

Antes de la llegada de los españoles su uso era fundamentalmente religioso y estaba reservado a la casta gobernante; los incas reprimieron su consumo entre la población campesina, como después lo hicieron los españoles y ahora los estadounidenses. En ello aplican dos lógicas. Los incas, los españoles y los gobiernos republicanos toleraron su uso como reparador de la fatiga y sustituto del alimento, que permite grados terribles de explotación de la fuerza de trabajo. De hecho, los ciclos de auge de la producción minera fueron acompañados por el incremento en los volúmenes de la producción y consumo de la hoja de coca. Lo que se reprime sistemáticamente es el consumo autónomo de la coca, que genera vida comunitaria, que alimenta la dimensión espiritual y cultural de la población andina y es incontrolable por los dominadores y potencialmente liberadora.

---

del estado de la materia elaborado por una diversidad de instancias académicas o ejecutivas, públicas o privadas, oficialistas o incluso contestatarias. El documento en conjunto contiene una orientación clara de legitimación de las líneas de acción decididas por el Banco Mundial.

El cultivo a gran escala de la hoja de coca como materia prima para la producción de cocaína despunta en el Chapare a partir de 1985. Los mineros despedidos por el cierre de las minas estatales y los campesinos de los valles afectados por la sequía y por la falta de tierras se incorporan a la producción de coca como última alternativa de subsistencia.

Autores como Lassema (1996) y Weil (1993) consideran al cocalero como un campesino indígena que aplica la estrategia de multicultivos andina a un espacio distinto, la cual combina cultivos de subsistencia –arroz, yuca, maíz–, y otros productos destinados al mercado –cítricos y frutales–, con la producción de hoja de coca, cuyos precios son más altos. La diversificación de cultivos y de actividades como la artesanía es un mecanismo de defensa frente a las variaciones del mercado de la hoja de coca, más incierto que el de otros productos comerciales. Emplea fundamentalmente la fuerza de trabajo familiar y, ocasionalmente, fuerza de trabajo ajena, adquirida mediante intercambios laborales o de productos, o mediante salarios.

El carácter espontáneo de la migración al Chapare permitió que la organización de los productores fuera autónoma. Apoyados en la experiencia sindical de su previa condición de mineros o campesinos parcelarios, los sindicatos organizaron la vida de los nuevos asentamientos y fueron la instancia para tomar decisiones, organizar trabajos productivos y resolver disputas en espacios donde no existía institucionalidad previa. La estrategia de lucha de los cocaleros es pacífica –consiste principalmente en marchas desde el Chapare o Cochabamba a La Paz– y consigue el apoyo y la participación de otros sectores en su lucha.

El mayor obstáculo que enfrentan los cocaleros es la criminalización y la represión de su actividad productiva, decidida por Estados Unidos y acatada por los gobiernos bolivianos, que descarga en los campesinos cocaleros la responsabilidad por el gran negocio del narcotráfico. Cada gobierno boliviano formula su plan de erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca expropiando los medios de vida de 200 mil campesinos y afectando la economía boliviana que tiene en esa actividad una fuente de ingresos muy importante.<sup>24</sup>

El movimiento cocalero ha elaborado un discurso antiimperialista, atractivo también para otros sectores sociales, que denuncia la total subordinación de los gobiernos bolivianos al de Estados Unidos y la creciente presencia militar estadounidense en la zona.<sup>25</sup> Asimismo, denuncia el doble discurso de Estados Unidos que reprime a los pequeños productores de coca sin enfrentar firmemente a las grandes mafias internacionales; denuncia también que la erradicación se propone limitar la so-

<sup>24</sup> El Decreto 26415, aprobado el 27 de noviembre de 2001, prohíbe acopiar, secar, transportar y comercializar coca del Chapare, bajo pena de 8 a 12 años de prisión e incautaciones múltiples (boletín *Recosur*, 28 de febrero de 2002).

<sup>25</sup> Entre 1985 y 1999 han habido 77 intervenciones militares en la zona del Chapare, "para restablecer el orden". Las fuerzas represivas estadounidenses presentes son la DEA, la CIA, el Comando Sur, el Servicio de Guardacostas, la Patrulla Fronteriza y la Fuerza Especial. Entre las bolivianas están la FELCN, Fuerza de Tareas de las Fuerzas Armadas, UMOPAR, Policía Ecológica, Guardia Especial de Seguridad (GES) y DIRECO. Todas estas fuerzas represivas suman más de 3 mil 500 efectivos (Gironda, 2001:300).

breproducción de coca para mantener elevado el precio de la cocaína; denuncia los efectos destructivos para el equilibrio ecológico de la zona y para la salud de la población por los herbicidas que aplica; denuncia la violación de los derechos humanos de los productores y del principio de libre mercado que sustenta al capitalismo, al impedir a los cocaleros la libertad para producir y vender un producto que tiene una alta demanda en el mercado internacional y que proporcionaría un ingreso digno y seguro para los cocaleros y para el país.<sup>26</sup>

Los cocaleros justifican la defensa de la producción de la hoja de coca en el consumo tradicional y ritual de los pueblos *originarios*: la "coca como hoja sagrada", como parte de su identidad y su cultura. En el caso boliviano, a diferencia del peruano, la embajada estadounidense no puede demostrar vínculos fehacientes de los cocaleros con los narcotraficantes ni con el terrorismo. En distintos episodios las autoridades han montado provocaciones o imputado a los cocaleros vínculos con movimientos armados.

### El abigarramiento de los sujetos étnicos

En la actualidad, en Bolivia se denomina como pueblos *indios* a los habitantes de las tierras bajas, que son (o fueron) nómadas y recolectores, y como pueblos *originarios* a los habitantes de las tierras altas andinas (altiplano y valles), que son campesinos comunitarios aymara y campesinos parcelarios quechua. Los pueblos *originarios* rechazan el término *indio* por considerarlo discriminatorio.<sup>27</sup>

Los resultados del censo de población y vivienda de 2001 indican que el 50.8 por ciento de la población boliviana habla alguna lengua originaria: un 28.27 por ciento habla quechua, un 18.34 por ciento habla aymara y un 4.2 por ciento habla otras 35 lenguas.<sup>28</sup> Del total de hablantes de lenguas originarias, el 93.8 por ciento corresponde a cuatro pueblos *originarios* andinos: Aymara, Quechua, Uru y Afroboliviano, y el 6.1 por ciento a 33 pueblos *indios* de tierras bajas, siendo los más numerosos los pueblos Guaraní y Chiquitano.

En los datos ofrecidos salta a la vista la abrumadora presencia de los pueblos *originarios* de tierras altas frente a una muy reducida de los pueblos *indios* de tierras bajas. No obstante, en el discurso y en el diseño de la legislación, en los programas, los presupuestos y en las soluciones, el gobierno consideró como sujetos étnicos de la *propuesta pluri-multi* únicamente a la población *indígena* del oriente e ignoró a la *originaria* del occidente del país. Este hecho ha sido cuestionado reiteradamente por los movimientos sociales originarios cuya constante de-

<sup>26</sup> La economía de la coca y la cocaína, estimada entre 150 y 500 millones de dólares al año (entre 1982 y 1989), sólo en la región cochabambina representaba entre el 15 y el 50 por ciento de las manufacturas nacionales que, en opinión de muchos, ha subvencionado la transición y el ajuste (Kruse, 2000:190).

<sup>27</sup> La Reforma Agraria de 1953 sustituyó el término indio por el de campesino al liberar (al menos formalmente) al trabajador rural del yugo del latifundista y convertirlo en propietario y ciudadano.

<sup>28</sup> Para el PNUD, la proporción de población indígena en Bolivia es de 60 por ciento (VAIPO, 2000).

manda de tierras no se ve satisfecha, ni siquiera considerada, bajo la concepción de territorios indios a la que las reformas se circunscriben.<sup>29</sup> La simbólica y racista operación de priorizar o privilegiar como sujeto étnico al dócil y débil amazónico, y omitir al mayoritario y rijoso andino, es una forma de negar al *otro*.

Como en otros países de América Latina, en el diseño del censo de 2001 se introdujeron variables que pretenden una mayor precisión para caracterizar la diversidad étnica y dar cuenta de los cambios recientes en su configuración. De igual manera, el diagnóstico del VAIPO señala la necesidad de corregir ese *ligero sesgo*. Ahora se vuelve la vista sobre la población olvidada de las tierras altas para "definir las variantes étnicas que existen entre los pueblos originarios, con la misma precisión con que se ha hecho para los indios de las tierras bajas" (VAIPO, 2000). Hoy se considera necesario "determinar qué y cuánto de campesinos tienen los pueblos *indios* de las tierras bajas y cuánto de *originarios* tienen los campesinos de las tierras altas" (*Ibid*), y así saber cuáles de sus componentes culturales son aprovechables en el proyecto económico dominante y qué elementos son inconvenientes. A diferencia de las viejas políticas liberales o las desarrollistas, que consideraban necesaria la desaparición de los atributos étnicos y sus peculiaridades, *liquidar el "problema del indio" para incorporarlo a la "civilización"*, los planificadores neoliberales de hoy se proponen apoyar el *desarrollo con identidad*, que consiste en: "... alentar el incremento de las ventajas competitivas de las prácticas civilizatorias propias de los pueblos indígenas y originarios que, con autogestión principalmente local fortalecida, alianzas estratégicas y sustentabilidad ambiental, mejor se adapten a los contextos regional, nacional e internacional" (*Ibid*).

Según el censo de 2001, el 62 por ciento de los bolivianos son amerindios y el 38 no lo son. El diagnóstico del VAIPO estima que del total de hablantes de lenguas del país sólo el 50 por ciento está asentado en comunidades y tierras comunitarias de origen, el 3 por ciento está en áreas de colonización y el 47 por ciento en ciudades intermedias y mayores. De manera que los *originarios* no sólo son campesinos comunitarios, sino también pobladores urbanos o colonos en tierras bajas que no han perdido ni su lengua ni su identidad cultural.

La presencia *originaria* aymara y quechua en el mundo marginal urbano se expresa en el empleo de estrategias de reproducción social de carácter étnico, de modo tal que se puede considerar a las ciudades como un piso ecológico más en las estrategias de supervivencia y en la cosmovisión *originaria*. Los residentes indígenas de la ciudad están en permanente relación con su lugar de procedencia; ya sea participando periódicamente de las prácticas culturales agrícolas de

<sup>29</sup> Se reconoce personería jurídica a todas las comunidades del país, en tanto ellas son la unidad territorial en que se aplica la Ley de Participación Popular que se refiere al proceso de municipalización, pero no se satisface su demanda de tierras ni se le otorgan los títulos de propiedad. En lo que va de la reforma no se han titulado tierras en el occidente andino, sólo en las tierras bajas. Y los mayormente beneficiados por el procedimiento de *saneado* (otro eufemismo) de tierras son los terratenientes, que al legalizar su propiedad se hacen sujetos de crédito e inversión externa.

sus regiones, en las fiestas de su comunidad de origen, o por la vía de parientes migrantes temporales con los que intercambian trabajo por productos en la lógica de la reciprocidad del *ayllu* (*Ibid*).

### El katarismo<sup>30</sup>

Los elementos que nutren la estrategia de neutralización del campo popular, la propuesta *pluri-multi*, fueron tomados del mismo movimiento etno-campesino que pretende derrotar, ya que intelectuales y dirigentes kataristas fueron cooptados por los partidos políticos tradicionales para asimilarse a la elite y actuar como intermediarios ante los campesinos originarios.

El programa katarista ha recorrido un sinuoso camino en su continuo esfuerzo por desmarcarse del poder y recomponerse como movimiento antisistémico. En este proceso ha cristalizado en distintas organizaciones, movimientos y estrategias, y en sus posiciones ha oscilado entre el indianismo y el clasismo, en una constante lucha interna entre dos o más tendencias.

Sus orígenes se remontan al final de la década de los sesentas del siglo XX cuando grupos de estudiantes aymaras de La Paz formaron varias organizaciones: el Movimiento 15 de Noviembre (fecha de la ejecución de Katari), el Movimiento Universitario Julián Apaza (MUA), en tomo a las ideas indianistas de Fausto Reynaga, que reivindican la recuperación de aymaras y quechuas de lo que fue suyo y fue apropiado por los blancos a partir de la Conquista. En 1969 crearon el Centro de Promoción y Coordinación Campesina (*Mink'a*) para organizar, educar y difundir sus ideas en las áreas rurales; en 1971 crearon el Centro Cultural Tupaj Katari para transmitir por radio su cultura y sus ideas. Genaro Flores, dirigente aymara, alcanza la Secretaría Ejecutiva de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz a la que se le añaden las siglas de Tupaj Katari (FDTCLP-TK).

El movimiento katarista comenzó a extenderse hacia otros departamentos, llevando a cabo tomas de tierras. El 1° de enero de 1971 miembros del movimiento realizaron una manifestación masiva en La Paz llevando retratos de Tupaj Katari. En agosto de ese mismo año el katarista Genaro Flores fue elegido Secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional Campesina, y días después el golpe militar de Bánzer inició la represión contra el movimiento que logró apagar; sólo sobreviven las transmisiones radiofónicas y las concentraciones cada 15 de noviembre en Ayo-Ayo (lugar de nacimiento de Katari). En esta primera fase el movimiento katarista se afirma como puente entre la ciudad (los maestros, estu-

<sup>30</sup> El movimiento katarista toma su nombre del caudillo aymara Tupaj Katari, pseudónimo de Julián Apaza, indio del "común" nacido en Ayo-Ayo, quien adoptó el nombre del cacique noble de Cusco, Tupac Amaru II y se coordinó con él en la rebelión contra el gobierno español; tomó también el nombre de Tomás Katari, cacique de Chayanta, Potosí, y extendió al norte la rebelión que aquel inició. Apoyado por su esposa Bartolina Sisa, sitió La Paz durante 109 días en 1781. No predicó la vuelta del Tawantinsuyo como Amaru, sino la edificación de un gobierno americano libre del dominio blanco.

diantes y universitarios aymara) y las comunidades aymara del altiplano. Las radios comunitarias son un eficaz instrumento en esta tarea.

Dos años después el movimiento revive, el 30 de julio de 1973 aparece el Manifiesto de Tiwanaku donde se afirma: "la república no es para el indio", firmado por el *Mink'a*, el Centro Cultural Tupaj Katari, la Asociación Nacional de Profesores Campesinos y la Asociación de Estudiantes Campesinos de Bolivia. En dicho documento se define como el sujeto del katarismo a los campesinos quechua y aymara y de otras culturas autóctonas del país, reconociéndose su doble identidad –étnica y campesina–, y que ha sido víctima de un doble agravio: económicamente explotado y cultural y políticamente oprimido. Se asume como pueblo oprimido por el país blanco y denuncia la falsedad de la pretendida integración de culturas. Lo que hay en realidad es una superposición y dominación de los blancos sobre los indios que ocupan el estrato más bajo de la pirámide social. El manifiesto concluye diciendo: "Somos extranjeros en nuestro propio país" (Rivera, 1983).

Una vez definidos los principios kataristas, en octubre de 1973 comienzan a expresarse dos tendencias ideológicas diferenciadas al interior del movimiento, cada una enfatizando alguno de los componentes de la identidad dual con su respectiva estrategia. La corriente *indianista* postula como sujeto al indio, prioriza el aspecto étnico sobre el clasista y recibe apoyo de las organizaciones indigenistas internacionales. La corriente *clasista* postula al campesino como el sujeto, combina la visión de clase y la étnica, utiliza más el concepto campesino aunque enfatizando su carácter cultural específico. Esta corriente es apoyada por los sectores progresistas de la iglesia boliviana (Caravantes García, 1991). En dicho proceso y en el debate que se propició, la izquierda tradicional marxista y criolla no tuvo participación.

En 1974 se produjo la Masacre del Valle, una cruenta represión de las movilizaciones indias con casi un centenar de muertos, lo que provoca una gran indignación campesina y destruye lo que quedaba del pacto militar-campesino, además de abonar el terreno para el arraigo del katarismo en el sindicalismo campesino.

Para 1978 las dos tendencias surgidas antes se consolidan y expresan en sendas organizaciones políticas: el Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA) y el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTK). El primero derivaba del *Mink'a* y de su periódico *Kollasuyo*, dirigido por Constantino Lima, Luciano Tapia y Julio Timiri. Este indianismo elige la estrategia de la lucha política a través de un partido y participa en las elecciones nacionales de 1978, 1979 y 1980. El MRTK, por su parte, dirigido por Genaro Flores, Macabeo Chila y Víctor Hugo Cárdenas, afirma su posición clasista vinculándose con el sindicalismo minero. Los partidos comienzan a tratar de capitalizar la fuerza social katarista en gestación.

### **La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia**

En junio de 1979 se realiza el Congreso de Unidad Campesina convocado por la Central Obrera Boliviana (COB); en él se funda la Central Sindical Única de Tra-

bajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), bajo la influencia del MRTK de Flores, Chila y Cárdenas. Su primera acción fue un bloqueo de caminos en noviembre y diciembre de ese mismo año. En enero de 1980 la CSUTCB crea su contraparte femenina, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa (FNMC-BS).

A partir del Primer Congreso extraordinario de la CSUTCB se definieron dos posiciones: por un lado el *katarismo autodeterminista*, que plantea como meta la autodeterminación de las naciones indias, es decir, la creación de estados independientes de aymaras y quechuas, ajenos a los gobiernos blancos, y por el otro, la *propuesta pluri-multi*, que acepta al Estado vigente aunque cuestionando su carácter excluyente y colonial, exige el reconocimiento de la identidad cultural y reivindica el derecho a ser parte de la patria boliviana, es decir, busca una inclusión negociada. Esta posición cristaliza en 1984 en la propuesta que lleva la CSUTCB al parlamento: el proyecto de Ley Agraria Fundamental (LAF) que por primera vez visualiza un Estado plurinacional, reivindica la temática de los territorios indígenas y originarios, y propone construir una Corporación Agropecuaria Campesina (CORACA) como brazo económico de la CSUTCB. La posibilidad de acceder a recursos financieros comienza a generar discordia al interior del movimiento haciendo fracasar a la CORACA.

En 1985 el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación (MRTKL), dirigido por Genaro Flores, Víctor Hugo Cárdenas y Walter Reynaga, caracteriza el conflicto social como la confrontación entre un *eje social colonial* dominante y un *eje social nacional* dominado. La alternativa que propone es fortalecer a este último mediante la participación en las elecciones, para las que postulan a Genaro Flores y al dirigente minero Filemón Escobar a la presidencia y vicepresidencia de la República, respectivamente. Únicamente se logran dos diputaciones: la de Cárdenas y la de Reynaga. La rivalidad entre ellos, por el liderazgo, los lleva a la división.

Entre 1988 y 1992 se produce el debilitamiento y la pérdida de influencia del katarismo sobre el sindicalismo. La tendencia sindicalista representada por Genaro Flores se debilita y la tendencia parlamentarista de Cárdenas sale de la Confederación asimilada por el Estado, sirviendo más tarde para legitimar las reformas liberales del gobierno de Sánchez de Lozada. La defección de Cárdenas y su alianza con el MNR fue un duro golpe para el katarismo y la expresión del proceso de asimilación y domesticación de una porción significativa de éste por parte del bloque neoliberal.

Haremos un paréntesis en la reseña de la evolución de la CSUTCB para explicar la aparición de dos actores importantes.

### **La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia**

El movimiento *indígena* en tierras bajas tiene actores con características muy diferentes respecto al movimiento de los originarios de tierras altas: por su aislamiento respecto de Los Andes y la dispersión de los grupos étnicos entre sí, su

contacto con el mundo occidental ha sido mínimo. La movilización de los *indígenas* del oriente comenzó a finales de los años setentas, promovida por el antropólogo alemán Jürgen Riester, quien, recuperando la experiencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP), fundó la organización no gubernamental Apoyo al Campesinado del Oriente Boliviano (APCOB, 1977), de la que surgió, en 1982, la Central de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), que integró inicialmente a ayoreos y guaraníes. Durante esa década se formaron varias centrales indígenas en Santa Cruz, Beni y Pando, y la CIDOB las incorporó pasando así de Central a Confederación.

Los indígenas del oriente tuvieron poco contacto con los blancos o karayanas. Su mayor contacto durante la Colonia fue con las misiones jesuitas y dominicas, y en el siglo XX con las iglesias y las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que cumplen, de manera legítima, la función de intermediación que ha permitido a los indios formular sus demandas ante el Estado y afirmar su presencia en la sociedad boliviana. La subordinación de este sector a las ONGs y, a través de ellas, a los programas del Banco Mundial es innegable. El movimiento no cuenta con recursos económicos propios, y depende del apoyo de ONGs como HIVOS-Holanda y OXFAM-América.

Los indígenas del oriente aprovechan una coyuntura internacional que les es favorable, su estrategia es pragmática, realista y desideologizada y carecen de un proyecto político articulado al conjunto nacional popular. Son cuestionados por el movimiento *originario* andino por negociar solos y en función de sus intereses particulares. Ellos explican su distancia frente a la CSUTCB y la COB por el andinocentrismo y campesinismo de los andinos.

### **El Ejército Guerrillero Tupaj Katari**

Para compensar el cambio de Víctor Hugo Cárdenas y su grupo al oficialismo, surge al interior de la CSUTCB una vertiente katarista guerrillera que se desarrolla paralelamente a las anteriores: la Ofensiva Roja de los *Ayllus* Tupajkataristas (ORATK), deriva del indianista MITKA, encabezada por el dirigente comunero aymara Felipe Quispe, llamado el *Mallku*.<sup>31</sup> La corriente guerrillera surgió en 1982 cuestionando al katarismo parlamentario de Luciano Tapia, elegido diputado por el partido Unidad Democrática y Popular (UDP), para el periodo 1982-1985. Quispe propone recurrir a la lucha armada para lograr la autodeterminación de las naciones originarias.

El katarismo de Quispe se inspira en las rebeliones de los dirigentes indios Tupaj Katari (1871) y Zárate Willka (1899), y reivindica sus formas de lucha y sus objetivos que:

aymaras y quiswas formemos estados independientes de trabajadores separados del estado burgués boliviano. –Proponen– construir el futuro re-encontrán-

<sup>31</sup> Palabra aymara para designar cacique, máxima autoridad tradicional.

donos con el pasado (...) recuperar y avivar la llama que nunca se apagó de la violencia armada desde nuestros *ayllus* y hacia las ciudades opresoras y discriminatorias, expresa el acercamiento de una gigantesca tempestad en contra de nuestros verdugos de siempre, expresa la maduración de voluntad de guerra, de olor a sangre, de fuego purificador que desde nuestras comunidades, desde nuestros corazones se prepara para destruir la civilización capitalista y la maldad burguesa (Patzí, 1999).

Sus planteamientos recuerdan el tono radical, violento y mesiánico de Sendero Luminoso, pero, a diferencia del movimiento armado peruano, con el que se pretendió vincularlos, sus temas no son clasistas sino indianistas, reivindican el elemento cultural y abandonan el discurso clasista "anclado en el dogmatismo de la vanguardia obrera y la concepción lineal de la historia, donde los campesinos forzosamente debían pasar por el proceso de proletarización, a partir del avance automático de las fuerzas productivas" (*Ibid*). Afirman que los partidos de izquierda y derecha tienen la misma cultura: son blancos y mestizos, descendientes de los invasores españoles, que con su dogmatismo han impedido que se exprese el contenido ideológico y político de la lucha de naciones (*Ibid*).

El 23 de junio de 1991 el Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK), brazo armado de la ORATK, inicia la *guerra comunitaria* colgando tres gallos rojos en distintos puntos de la ciudad de El Alto. Durante un año realizan varios atentados dinamiteros a torres eléctricas y gasoductos. Se trata, a decir de Félix Patzi, de la primera ocasión en el siglo XX en que el Estado boliviano se ve amenazado por una guerra dirigida por *originarios*. En el EGTK sólo participaron 5 blancos que apoyaron ideológica y logísticamente a la organización, pero el líder indiscutible es Quispe. Entre marzo y abril de 1992, el grupo de apoyo es capturado y el 19 de agosto ocurre lo mismo con el *Mallku*. Un mes después de su captura y prisión en la cárcel de San Pedro, en La Paz, 2 mil campesinos marchan a la ciudad para exigir su libertad. La amenaza armada resultó fácilmente desactivada. Después de 5 años de permanencia en la cárcel, los miembros del EGTK son liberados, a fines de 1997, gracias a la presión de los propios presos y de la opinión pública, ante un proceso judicial plagado de irregularidades.

### **La hegemonía cocalera en la CSUTCB**

Entre 1992 y 1998 el movimiento cocalero, integrado por campesinos quechua-hablantes de Cochabamba y Potosí, alcanza la hegemonía dentro de la CSUTCB y con ello la recuperación de su fuerza, luego de un periodo de debilitamiento, asumiendo como estrategia la defensa de la participación electoral del movimiento sindical. En el VI y el VII Congresos de la CSUTCB en Cochabamba (1994) y Santa Cruz (1996) se impone la línea que propugna crear el *instrumento político* (el partido), necesario para la participación de los pueblos *originarios* en los espacios de poder abiertos por las reformas neoliberales, es decir, la autorrepresentación política de los originarios quechua y aymara luego de 500 años de

exclusión. En contra de ellos están los *indianistas*, quienes rechazan la participación electoral por considerarla una forma de integración a la lógica estatal, de conversión de los dirigentes sindicales en funcionarios estatales, de legitimación del proyecto neoliberal y de perpetuación de la clase dominante. La CSUTCB participa en las elecciones municipales de 1995 y en las generales de 1997, obteniendo en esta última cuatro diputados uninominales por el departamento de Cochabamba, uno de los cuales es el dirigente cocalero Evo Morales.

En 1996, para modificar la Ley de Servicio de la Reforma Agraria (Ley INRA), se organizan los indígenas de tierras bajas y originarios de tierras altas y marchan juntos a La Paz. La Marcha Histórica se realiza bajo la consigna "La tierra para quien la trabaja". Al final, el gobierno accede a negociar únicamente con la CIDOB y deja de lado las demandas de la CSUTCB.

En junio de 1998, en el VIII Congreso de la CSUTCB se aprueba la "Tesis Política" a favor de la consolidación del *instrumento político* y la continuidad del liderazgo quechua. Sorpresivamente, sin embargo, en el Congreso de Unidad Campesina realizado en La Paz, en noviembre de ese año, es elegido como Secretario Ejecutivo el dirigente Felipe Quispe, *el Mallku*, lo que significa la recuperación del liderazgo aymara en el movimiento campesino, que plantea la construcción de un Estado propio de aymaras, quechuas y pueblos indígenas del oriente por la autodeterminación de las naciones originarias confederadas, y rechaza la propuesta *pluri-multi*, que destruye la solidaridad comunaria y en general la cultura *originaria*, al incorporar a los dirigentes a la carrera partidaria por alcaldías y diputaciones.

### **Faccionalismo y sindicalismo katarista**

Parece contradictorio que una ideología indianista como el katarismo, que postula la recuperación de las formas de organización originarias, adopte la forma de organización sindical como instrumento de organización, como mecanismo de deliberación y de resolución de conflictos, y como garantía de permanencia, institucionalidad y legitimidad ante las bases, luego de batirse, durante más de una década, contra los que desde el nacionalismo revolucionario o desde la izquierda le impusieron un molde clasista a las luchas de campesinos aymaras y quechuas. La CSUTCB no surge a partir de la apropiación de una estructura organizativa preexistente en una lucha entre grupos de vanguardia, sino como resultado de la reapropiación de una *tradición nueva*. El sindicalismo campesino, impuesto por los nuevos sectores dominantes a partir de la Reforma Agraria de 1953, era una forma de organización y control político a la que los campesinos debieron habituarse y adaptar sus propias estructuras productivas. Pero nuevas circunstancias, marcadas por el agotamiento de la relación clientelar, la necesidad de organizarse de manera autónoma para enfrentar nuevos retos y de probar formas y estrategias de lucha diversas, hacen que la base campesina encuentre que la ya arraigada tradición de militancia sindical es la forma de organización más adecuada, que es en sí misma una reelaboración de la organización comunal. Su nombre y estructu-

ra formal exhiben la cara clasista del movimiento y encubren el elemento originario comunal, pero éste sigue siendo fundamental, expresando así lo abigarrado de la sociedad boliviana y del campo popular, integrado por un amplio espectro de sujetos étnicos: los pueblos *originarios* del altiplano y los valles, que son campesinos e indígenas en distintas proporciones.

Bajo la máscara del sindicato de base siempre se practicaron los sistemas tradicionales de poder tales como los *Jilakatas*, *Mallkus*, *Mandonos*, *Jilancos*, *Segunda Mayor*, *Kuracas*, etcétera, que subsisten entre las diversas etnias. En espacios con predominio del sistema de *ayllus*, como el Norte de Potosí, estos sistemas de autoridad se recomponen, a veces enfrentados a la estructura sindical que los constriñe y a veces en armonía con ella, distribuyéndose las funciones. Para el intelectual aymara Félix Patzi, el sindicato sólo fue perjudicial a nivel supracomunal, de central agraria hacia arriba, donde reprodujo la política liberal basada en la usurpación de la soberanía colectiva; en cambio, la base no fue corrompida pues el sindicato se mimetizó en ella (*Ibid*).

Sobre la impronta de la forma sindicato y su virtual sincretismo con la estructura comunal, resulta elocuente la aclaración que ofrece el censo 2001, en cuanto a que las unidades geográficas menores al Cantón son heterogéneas pudiendo denominarse de las siguientes formas: comunidades, centrales, subcentrales, colonias, brechas, sindicatos, ex estancias, etcétera. Dichas estructuras geográficas se denominan genéricamente *organización comunitaria* y están estructuradas según sus usos y costumbres o de acuerdo a sus disposiciones estatutarias.

Otras estructuras integradas a la CSUTCB incluyen a sectores no comprendidos en la lógica comunitaria, como en el caso de la Confederación de Trabajadores Colonizadores de Bolivia (CTCB), que agrupa a campesinos indígenas de tierras altas aymaras y quechuas que migran a colonizar las tierras bajas, entre los que destacan los cocaleros. Hay también organizaciones de zafreros y cosechadores de algodón, de carácter más proletarizado.

Los pliegos petitorios de la CSUTCB incluyen demandas de distintos sectores: por ejemplo, tierras, ante el problema del minifundio en el altiplano y los valles del occidente andino; o de la liquidación del neolatifundismo en las tierras bajas, cuyo predominio impide ejercer los derechos territoriales de los pueblos indios reconocidos formalmente. También se incluyen las demandas de los colonizadores del movimiento cocalero contra las políticas de sustitución forzada de cultivos.

Avalada por la Central Obrera Boliviana (COB), expresión de la vieja centralidad obrera ya desaparecida en cuyo seno se formó, la CSUTCB fue desplazándola gradualmente, asumiendo la centralidad que el movimiento indígena y campesino adquiere en las últimas décadas. Hereda de la COB su voluntad hegemónica sustentada en la fuerza social que representa y que no se limita a lo gremial, sino que se asume como sujeto político, depositario de una rica tradición organizativa, assembleísta, que no era exclusivamente occidental sino una mezcla entre occidental y andina, elaborada por una clase obrera minera de ascendencia quechua.

\* La CSUTCB no es un aparato dominado definitivamente por una corriente, sino el ámbito donde diversos proyectos, matices ideológicos y estrategias de lucha son

sometidos a la consideración de las bases de manera sistemática y periódica en los congresos nacionales, su máxima instancia resolutoria. Las bases eligen la línea a seguir y tienen la obligación de continuarla. Su comité ejecutivo está compuesto por un triunvirato representativo de los tres grandes grupos etno-culturales del país: aymaras, quechuas y tupi/guaraníes.<sup>32</sup> El secretario ejecutivo es rotatorio, permanece en el cargo dos años y se alternan un quechua y un aymara. La estructura organizativa se ramifica en distintos niveles jerárquicos que integran los distintos ámbitos territoriales, hasta llegar a la base constituida por los sindicatos agrarios de cada una de las más de 5 mil comunidades que existen en Bolivia. Son ellas el punto de partida de una democracia y organización comunitaria que abarca a todo el país, como un Estado alternativo en formación y actuante.

Esta compleja red capilar, que el sindicalismo katarista construyó sobre las comunidades indígenas y campesinas, no fue diseñada por alguna vanguardia en particular, fue resultado de la evolución política de esos heterogéneos actores etno-campesinos. Es una construcción de masas que, como denuncian los kataristas radicales, la Ley de Participación Popular pretende aprovechar y sustituir, refuncionalizando la organización etno-campesina bajo la estructura municipal, base de una reforma política que, al incorporar a *originarios e indios* en la vida política electoral y occidental, pretende convertirlos en otra cosa.

En el diseño de la propuesta *pluri-multi*, el componente faccional de la cosmovisión andina ha sido aprovechado para evitar las posibilidades de una alianza popular interétnica. Las reformas neoliberales promueven la separación, la diferenciación y la confrontación entre los *originarios* del altiplano y de valles por un lado, y los indios amazónicos por el otro; entre comunarios del altiplano y los cocaleros del Chapare; entre aymaras y quechuas; entre el liderazgo carismático de Felipe Quispe y el de Evo Morales; entre sindicato y partido; entre comunidades y sindicatos, etcétera.

Pero, como hemos visto, en la evolución del katarismo y de la CSUTCB el mismo faccionalismo es un elemento que ha permitido un constante debate y ajuste del programa y de la estrategia; un permanente cuestionamiento de los dirigentes; y el ejercicio de una democracia popular, de abajo hacia arriba, en un continuo decantar de posiciones y liderazgos que revitaliza a la organización y le permite escapar a la cooptación por el aparato político oficial, mediante la radicalización de sus dirigencias, programas y estrategias de lucha.

La consolidación de los liderazgos de Morales y Quispe, y la magnitud de las movilizaciones populares a partir del año 2000 son cambios muy significativos, si miramos al pasado todo esto ha ocurrido a pesar de las reformas neoliberales.

Las marchas pacíficas han sido el método de lucha de los tres movimientos étnicos, estrategia muy adecuada al contexto democrático boliviano, regional e internacional. El problema es cuando se convierten en enfrentamientos urbanos y bloqueo de caminos, como ocurrió en los años 2000 y 2003, y reviven en blancos y en indios la memoria de pasados combates. Los blancos, aislados en su ciudad,

<sup>32</sup> Estos últimos, más simbólicos que reales.

se enfrentan al desabasto y al hambre provocada por quienes tienen la función de alimentarlos, advirtiendo así su vulnerabilidad frente a una mayoría india que amenaza su integridad y la de su familia. Las autoridades se desesperan y comienzan a aplicar medidas represivas y pierden el control de la situación. Los rebeldes, en cambio, viven una lucha organizada comunitariamente en la que participa toda la familia, hasta sus animales. Se organizan en turnos para las guardias, se comprometen y exigen el cumplimiento de sus obligaciones hacia la lucha, reciben el apoyo logístico de otros sectores. Se alimentan en ollas comunes más grandes que las de la vida normal, en fin, experimentan la fuerza de su unidad y su condición de mayoría. Usan su lengua como instrumento de coordinación y comunicación que su enemigo no puede interceptar, se vuelven insolentes con el blanco. En esas condiciones, se evidencia lo superficial y precario de la institucionalidad democrática tan publicitada, y se vive el riesgo de que esa máscara de civilidad neoliberal, asumida por los dominantes, se desvanezca de repente.

### Bibliografía

- CARAVANTES GARCÍA, Carlos M. (1991), "El katarismo en Bolivia, hoy", en *Encuentros debate. América Latina ayer y hoy*, Barcelona, Universidad de Barcelona.
- CONFEDERACIÓN SINDICAL ÚNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE BOLIVIA (2001), *Pliego de Peticiones del Pacto Intersindical*, La Paz, CSUTCB, junio.
- GARCÍA LINERA, Álvaro *et al.* (2001), *Tiempos de rebelión*, La Paz, Muela del Diablo, Colección "Comuna".
- GIRONDA C., Eusebio (2001), *Coca inmortal*, La Paz, Plural.
- GOLTE, Jürgen (1986), *La racionalidad de la organización andina*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
- GÓMEZ, Luis (2002), "Autonomía indígena y la coca", entrevista a Felipe Quispe, en *Narco News*, núm. 17, 15 de enero, <<http://www.narconews.com/Issue30/articulo776>>.
- GUTIÉRREZ AGUILAR, Raquel (2001), "La coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida. A un año de la guerra del agua", en Álvaro GARCÍA LINERA *et al.*, *Tiempos de rebelión*, La Paz, Muela del Diablo, Colección "Comuna".
- KUSCH, Rodolfo (1977), *El pensamiento indígena y popular en América*, Buenos Aires, Hachette, 3ª edición.
- KRUSE, Tom (2000), "Transición política y recomposición sindical. Reflexiones desde Bolivia", en Enrique TOLEDO DE LA GARZA, *Tratado latinoamericano de sociología del trabajo*, México, COLMEX/FLACSO/UAM/FCE.
- LASSERNA, Roberto (1996), *20 juicios y prejuicios sobre coca-cocaína*, La Paz, Clave.
- MATOS MAR, José (1993), "Población y grupos étnicos de América", en *América Indígena*, México, Instituto Indigenista Interamericano, vol. LIII, núm. 4, octubre-diciembre.

- PATZI PACO, Félix (1999), *Insurgencia y sumisión. Movimientos indígena-campesinos (1983-1998)*, La Paz, Muela del Diablo.
- PNUD (2003), *Informe sobre Desarrollo Humano (IDH)*, Madrid, Mundi-prensa.
- RIVERA CUSICANQUI, Silvia (1983), "Luchas campesinas contemporáneas en Bolivia: el movimiento "katarista", 1970-1980", en René ZVALETA (compilador), *Bolivia hoy*, México, Siglo XXI.
- (1986), *Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechua de Bolivia, 1900-1980*, Ginebra, Naciones Unidas.
- (2001), *Conferencia*, La Paz, ILDIS, 20 de octubre.
- SCOTT, James C. (2000), *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos*, México, Era.
- QUISPE HUANCA, Felipe (2001), "Organización y proyecto político de la rebelión indígena aymara-quechua", en Álvaro GARCÍA LINERA et al., *Tiempos de rebelión*, La Paz, Muela del Diablo, Colección "Comuna".
- VICEMINISTERIO PARA ASUNTOS INDÍGENAS Y POPULARES (VAIPO) (2000), *Diagnóstico integral de los pueblos indígenas de Bolivia*, La Paz, VAIPO.
- WACHTEL, Nathan (1976), *Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1530-1579)*, Madrid, Alianza Universidad.
- WEIL, Jim y Connie WEIL (1993), *Verde es la esperanza. Colonización, comunidad y coca en la Amazonia*, Cochabamba, Los amigos del libro.
- WERMUS, Daniel (2002), *¡Madre Tierra! Por el renacimiento indígena*, Quito, Abya Ayala.

Julio de 2004